

El nuevo movimiento agrario: autogestión y producción democrática

GERARDO OTERO ¹

UNA DE LAS polémicas más acaloradas que se dieron en México durante los años setenta se refería a la estructura agraria, la diferenciación social campesina y las luchas del campo. Esta polémica ha estado a la cabeza de las discusiones latinoamericanas sobre la cuestión agraria. Muchos estudiosos de otros países recurrieron al debate mexicano en busca de inspiración teórica para el análisis de las clases agrarias y los procesos políticos de sus propios países.

El enigma empírico que inició la polémica es el siguiente: en algunas regiones los trabajadores rurales parecían comportarse como campesinos mientras que en otras los campesinos parecían comportarse como obreros.² De acuerdo con la teoría leninista, los trabajadores deberían luchar por salarios más altos, mejores condiciones de trabajo, sindicalización y, en última instancia, por el socialismo. Así pues, los autores que se ubicaban en esta tradición pensaban que se requería de un partido de “vanguardia” que viniera a enderezar la “falsa conciencia” de estos trabajadores, para hacerla corresponder con los intereses materiales que dictaban sus posiciones de clase en las relaciones de producción. Otros, inspirados por Chayanov, pensaban que los trabajadores rurales generalmente tenían acceso a la tierra, de una u otra forma, en virtud de lo cual eran en realidad campesinos.³

Con el propósito de abordar esta polémica, y con la esperanza de trascenderla, se presenta aquí la historia de una de las regiones agrícolas donde el capitalismo mexicano se ha desarrollado en su forma más acabada. Se resaltarán mi propia interpretación del proceso de formación política de

¹ Investigador del Instituto de Estudios Económicos y Regionales, Universidad de Guadalajara, y de la División de Ciencias Económico-Administrativas del ITESO. El autor expresa su agradecimiento a las siguientes personas por sus útiles comentarios a una versión anterior de este trabajo: David Barkin, Roger Bartra, Jorge Calderón, Barry Carr, Carlos Ferra Martínez, Jonathan Fox, Nora Hamilton, Úrsula Oswald, Ivan Szelenyi y Erik Wright.

² Juan Martínez-Alier (1977) resaltó esta aparente paradoja para el caso de los campesinos y trabajadores agrícolas peruanos. Aquellos luchaban por construir sindicatos, y éstos por la tierra.

³ Para una historia intelectual del debate mexicano, véase CEPAL (1982), Harris (1978) y Hewitt de Alcántara (1984).

clases, la cual difiere de las dos posiciones principales en la polémica mexicana. A diferencia de ellas, que destacan ya sea el acceso a los salarios o a la tierra como determinantes principales del carácter de las luchas en el campo —proletarias o campesinas—, yo argumento que el proceso de formación política de clases está mediado por las formas predominantes de cultura e intervención estatal, además del vínculo causal que tal proceso mantiene con las posiciones de clase en las relaciones de producción. Además, ha sido el semiproletariado agrícola el que ha estado en el centro de las luchas agrarias, más que el proletariado o el campesinado propiamente dichos. Es este semiproletariado el que se encuentra en la condición más inestable en relación con sus condiciones materiales para la reproducción económica; puesto que constituye actualmente la mayor proporción de la población rural (Bartra y Otero, 1988), se convierte en una cuestión crucial determinar en qué tipo de luchas se puede ver inmerso este sector, dada la diversidad de contextos culturales y políticos en las regiones de México (Otero, 1986).

Este trabajo estudia la región donde el capitalismo ha alcanzado un mayor desarrollo en la agricultura mexicana: el sur de Sonora, específicamente el Valle del Yaqui. Seguiremos un conjunto complejo de trayectorias de clase tanto para las clases subalternas como para las dominantes. Uno de nuestros objetivos es presentar la formación de una de las burguesías agrarias más feroces de México: la que separó violentamente a los productores directos de sus medios de producción en el noroeste de México. Este proceso implicó recorrer la frontera hacia los Estados Unidos a la vuelta de este siglo, destruyendo a los indios yaquis y mayos en su camino en tanto productores campesinos y convirtiéndolos en un semiproletariado agrícola.

Para los años setenta, el grueso de los productores agrícolas directos estaba fuertemente proletarizado. No lo estaba de manera completa ni permanente, pues el carácter estacional de la producción agrícola hace imposible que estos productores consigan empleos asalariados durante todo el año, por lo cual tenían que complementar sus ingresos con actividades comerciales o trabajos marginales ocasionales. La posición estructural que dominaba en el valle era, sin embargo, proletaria o semiproletaria para cerca del 75% de la fuerza de trabajo agrícola. Este hecho marcó las luchas agrarias de la década pasada con un carácter "postcapitalista".

Por "postcapitalista" quiero designar una situación en la que los semiproletarios resisten exitosamente la proletarización con formas de producción centradas en la autogestión y el control democrático del proceso productivo. Se trata de una forma de producción cooperativa en la que se realizan esfuerzos conscientes por ganar grados sustanciales de independencia y autonomía, tanto del Estado como de los capitalistas privados. En cierto sentido, se trata de una "asociación libre de productores directos" (Marx), que debe funcionar en un mercado capitalista, aun cuando su propia organización se plantea como la semilla para una forma post-

capitalista de organización de todas las actividades económicas: la autogestión y el control democrático de la producción.⁴

A pesar de que la demanda central de las luchas en Sonora era precisamente la tierra, ésta iba acompañada por la demanda de maquinaria, instalaciones y, más importante aún, por el control del proceso productivo. Así pues, la demanda por la tierra deja de tener un carácter meramente campesino para asumir un carácter globalmente postcapitalista.

Las intervenciones estatales han estado dominadas por la fuerza desproporcionada de la burguesía agraria del sur de Sonora. De aquí que las organizaciones de clase que surgieron asumieran un carácter de oposición, aun cuando fueron duramente reprimidas, y en gran medida dismanteladas, desde fines de los años cuarenta hasta mediados de los setenta. No sería sino hasta entonces cuando el semiproletariado agrícola podría darse una organización más fuerte para confrontar al Estado y a la poderosa burguesía agraria.

Como veremos en este trabajo, la organización que resultó finalmente, la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y El Mayo, proporciona hoy lecciones ejemplares para el movimiento agrario en México y otros países, tanto en términos económicos (productividad) como políticos (democracia y autonomía). Aunque su "modelo" no puede reproducirse como tal, otros movimientos regionales en México ya se han vuelto hacia la Coalición, no sólo para proporcionarle su entusiasta solidaridad, sino para aprender las lecciones de su experiencia. Claramente, la propia Coalición se ha basado en las lecciones previas al movimiento agrario del México post-revolucionario. Veamos ahora con detalle cuál fue el proceso de formación de clases en el Valle del Yaqui, concentrándonos en los cambios estructurales, políticos y culturales.

DE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA A LA NUEVA ALIANZA DOMINANTE

Antes del porfiriato (1876-1910), la posición geográfica de Sonora permitió a los yaquis, pápagos, seris y mayos mantenerse apartados de resto del país durante la mayor parte del siglo pasado. Pero esto cambió a medida que el capitalismo mexicano buscó expandirse a las tierras fértiles de la frontera noroeste de México, donde los indios se convirtieron en una fuerza de trabajo potencial.

De los cinco ríos principales de Sonora (Magdalena, Sonora, Metape, Yaqui y Mayo) sólo el Yaqui tenía un flujo permanente de agua (Aguilar Camín, 1977). Esto puede explicar la dramática historia de luchas re-

⁴ Utilizo el término de "postcapitalismo" como un "tipo ideal" en el sentido weberiano. En algunos casos encontraremos ejidos colectivos que tienden a contratar cantidades significativas de fuerza de trabajo, más allá de las capacidades de sus propios miembros. En estos casos, tales ejidos estarán más cerca de una cooperativa capitalista que de una "postcapitalista".

currentes por controlar las tierras y el agua del valle del Yaqui. Y puede explicar también algunas de las diferencias culturales entre yaquis y mayos. Los primeros pudieron sostener una economía independiente por un período más largo después de los primeros contactos con las sociedades novohispana y mexicana. En contraste, los mayos comenzaron a vender su fuerza de trabajo antes de mediados del siglo pasado, en algunas explotaciones mineras de Álamos, uno de los primeros asentamientos de blancos en el área mayo, debido a su base más débil para la reproducción económica (Hu-DeHart, 1981, 1984).

La pacificación de los mayos fue la condición para que se desarrollara la industriosisidad proverbial de Sonora, nos dice el historiador Héctor Aguilar Camín (1977). Dotó a la burguesía emergente de una de las fuerzas de trabajo más trabajadoras y resistentes. Tras su pacificación, el gobierno federal otorgó parcelas de tierra a unos cuantos indios mayos, pero la mayoría trabajaban por un salario en los ranchos, minas y haciendas. Este pequeño "favor" (tierra y empleo) siguió a la implacable represión que tuvieron que aguantar y convirtió a los mayos en una fuerza de trabajo relativamente dócil.

Tal proceso de "acumulación originaria" está íntimamente relacionado con la expansión del capitalismo estadounidense hacia sus territorios del suroeste, y hacia el noroeste de México. Las compañías norteamericanas de colonización comenzaron a entrar en Sonora a partir de 1900, bajo los auspicios y la simpatía oficiales y la mediación de influyentes políticos locales, quienes tenían cercanos vínculos familiares con la emergente burguesía agraria. El propósito de la burguesía sonorensis al invitar a compañías extranjeras, era promover la inmigración de capitalistas industriales que inyectaran dinamismo a la economía del Estado. Dicha inmigración estuvo acompañada por una fuerte penetración de inversiones, tecnología y por la mentalidad empresarial que caracterizó al suroeste norteamericano. El espíritu central de esta penetración fue la preocupación por las ganancias, que se perseguían con una estricta y voraz racionalidad (Aguilar Camín, 1977: 56-59).

Para la época de la guerra civil (1912-1917), la gran mayoría de los indios yaqui había sido exterminada o deportada por el ejército de Porfirio Díaz. Los que se quedaron fueron eventualmente reclutados por el ejército revolucionario de Álvaro Obregón, quien les prometió restituirles sus tierras. Pero no sería sino hasta mediados de los años veinte cuando se permitiría el regreso de los yaquis deportados a su territorio tribal. Obregón se vio forzado, durante su presidencia (1920-1924), a cumplir en alguna medida su promesa a los yaquis. Sin embargo, los poderosos intereses capitalistas eran superiores a la voluntad de Obregón de cumplirla. A su regreso, los miembros de la tribu fueron marginados a la ribera norte del río Yaqui, es decir, *fuera* de las fértiles tierras del valle. Cuando fueron a protestar ante Obregón, el ejército mexicano ocupó inmediatamente los pueblos yaquis.

No obstante, buena parte de su modo de vida fue reorganizada en torno a sus creencias religiosas tradicionales, centradas en una deidad llamada Nuestra Señora, una mezcla sincrética de catolicismo y religión precolonial. Ella encarnaba la iglesia yaqui, "una institución y lugar sagrados en cada aldea, en torno a la cual enterraban sus muertos" (Hewitt de Alcántara, 1978:239). El lugar también representaba el carácter sagrado del territorio yaqui, que lo hacía inalienable.

Así pues, luego de tres décadas de proletarización, los yaquis restauraron una economía campesina centrada en cultivos de subsistencia, como maíz, frijol y calabaza. Esta experiencia de recampesinización no se desarrollaría por mucho tiempo sin el estorbo del capitalismo agrario, que se expandía en la región.

Además de las concesiones de tierra a los yaquis, algunos ejidos se formaron antes del período cardenista (1934-1940). Pero éstos fueron más bien simbólicos. Los 38 ejidos que existían contaban con 188 055 hectáreas de tierras marginales, en manos de 4 071 ejidatarios y sus familias. Dada la pobre calidad de estas tierras, muchos yaquis y otros trabajadores mestizos tenían que vender su fuerza de trabajo en la región, con lo que constituían un semiproletariado en términos económicos.

Hacia 1935, las condiciones empeoraron para los productos directos. Los trabajadores agrícolas recibían sólo 1.56 pesos diarios en ese año, comparado con 2.33 en 1929. La polarización en la distribución de la tenencia de la tierra era también profunda. De 10 409 unidades registradas por el primer Censo Agrícola de 1930, 5 577 (el 53.6%) tenían menos de 10 hectáreas, y controlaba tan sólo un 0.3% de la tierra. Luego, había sólo 38 ejidos de 50 hectáreas o más, que controlaban un 0.4% de la tierra. Finalmente, el sector latifundista (con unidades de más de 1 000 hectáreas), controlaba el 89% de la tierra, y representaba sólo el 8.8 de las propiedades privadas (Sanderson, 1981:91-93). Este paraíso de la burguesía agraria pronto se estremecería con la reforma agraria cardenista en Sonora.

CARDENISMO: FIN DE LA HEGEMONÍA DE LA BURGUESÍA AGRARIA

En 1937, se distribuyeron 17 000 hectáreas de tierra irrigada entre 2 160 trabajadores sin tierra. Las 27 638 hectáreas restantes de tierra irrigada se dividieron entre 840 propietarios, para cumplir con la máxima superficie legal de 100 hectáreas de riego, establecidas durante el cardenismo. Otras 36 000 hectáreas de tierra desértica también se distribuyeron a los ejidos en 1937, y se les dio una cantidad similar a los terratenientes, en compensación por las 17 000 hectáreas irrigadas que fueron distribuidas entre los nuevos ejidatarios. Esta distribución de tierra irrigada incrementó la proporción que detentaba el sector ejidal en un 40%. De cualquier manera, esta proporción descendería agudamente en la siguiente década

hasta 17%, debido a una expansión sin precedentes de la frontera agrícola mediante el desarrollo de la infraestructura de riego realizada por el Estado (Silos-Alvarado, 1968).

Con la distribución cardenista de tierras ejidales, la organización para la producción de la mayoría de las tierras irrigadas se volvió colectiva y el Banco Ejidal (hoy Banrural) tuvo una presencia crucial en créditos y asistencia técnica. Creado por Cárdenas para apoyar financiera y técnicamente a los ejidos colectivos, el Banco Ejidal fue fundamental en los primeros años de la reforma agraria para lograr buenos niveles de productividad (Otero, 1989). En los primeros años (1938-1943), los ejidos colectivos fueron en verdad muy productivos, con rendimientos más altos que el promedio regional para todas las operaciones agrícolas (ver cuadro 1).

CUADRO 1

RENDIMIENTOS PROMEDIO DE ARROZ Y TRIGO EN EL VALLE DEL YAQUI

1938-43 (Kilogramos/hectárea)

<i>Cultivo</i>	<i>Todo el Valle</i>	<i>Ejidos</i>
Trigo	774	823
Arroz	1 636	1 688

FUENTE: Sanderson, 1981:146.

Para este entonces (1937), los yaquis no sólo luchaban por la tierra, de manera típicamente campesina: luchaban también por su identidad étnica. Sin embargo, cuando el Estado distribuyó tierras a los yaquis, éstos tuvieron que aceptar las reglas estatales del juego: la presencia avasalladora de los aparatos económicos del Estado en la organización y el control de la producción agrícola. La recientemente reconstituida economía campesina de los yaquis, se convirtió en empresas colectivas, supervisadas muy de cerca por el Banco Ejidal. Esto dejó a los nuevos ejidatarios en una posición muy vulnerable, en relación tanto con el Estado como con la burguesía agraria.

De hecho, por lo menos para los yaquis, la exitosa lucha por la tierra resultó en una derrota definitiva en su lucha nacional. A partir de entonces tuvieron que someterse al Estado mexicano, es decir, el Estado ganó la iniciativa respecto del futuro desarrollo agrario de la región. Se establecieron así las condiciones para una plena integración de los yaquis a la vida nacional, con todas sus implicaciones, sobre todo una integra-

ción al proceso de desarrollo capitalista. Esta fue también la condición para una lenta pero segura transformación de las luchas étnico-campesinas en luchas postcapitalistas. No obstante; pasarían más de tres décadas antes de que estas luchas surgieran.

FIN DE LA REFORMA AGRARIA Y BOICOT A LOS EJIDOS COLECTIVOS

El fin de la reforma agraria cardenista puede ubicarse en 1938, hacia el último periodo de esta administración. La política oficial se volcó a impulsar el proceso de industrialización, y la agricultura se subordinaría a esa meta. La inminencia de la segunda guerra mundial planteaba una política de "unidad nacional", y el propio reformismo de Cárdenas se vio limitado por las reacciones extranjeras contrarias a la expropiación de la industria petrolera y a un creciente descontento de la burguesía interna (Hamilton, 1982). Después de la segunda guerra mundial, la clase obrera y las organizaciones de masas en general estaban desmovilizadas y controladas por el aparato estatal. En particular, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) habían sido convertidas en fuertes ramas políticas para el control estatal de campesinos y obreros. Los ejidos colectivos se convirtieron, en este contexto, en blanco de destrucción, en parte porque se habían transformado en bastiones de organizaciones socialistas y de oposición, y también porque su ejemplo representaba una amenaza para la operación de las empresas capitalistas en la agricultura.

La nueva política económica de apoyo a la industrialización se combinó con un compromiso con la ideología individualista contra los ejidos colectivos. A estos últimos se les ubicó dentro de la "amenaza del comunismo". Era la época de la postguerra, cuando los vecinos del Norte comenzaban su guerra fría contra la Unión Soviética, que en México, se tradujo en la forma de un vigoroso ataque a cualquier cosa que pudiera asociarse con el fantasma comunista.

Las tendencias individualistas en la nueva política ejidal fueron sancionadas por dos leyes aparecidas en 1942: el nuevo Código Agrario y la nueva Ley de Crédito Agrícola del 31 de diciembre de ese año. La primera ley ponía un gran énfasis en los títulos de propiedad, supuestamente para asegurarle la posición de la tierra a cada ejidatario individual. De hecho este énfasis en el título individual iba de la mano con las presiones burguesas para que el gobierno les otorgara "certificados de inafectabilidad", que constituyen garantías para que sus detentadores no puedan ser sujetos de expropiaciones de tierra por 25 años. Esto se publicitó como la condición para que se desarrollara la iniciativa empresarial en la agricultura. Entre 1938 y 1950, los terratenientes de Sonora recibieron 41 certificados de inafectabilidad que cubrían 598 460 hectáreas (Sanderson, 1981:147). Aunque la mayor parte de estas tierras eran

originalmente de agostadero, fueron convertidas en tierras agrícolas mediante las grandes inversiones del gobierno en infraestructura de irrigación, y los certificados de inafectabilidad siguieron siendo válidos.

Por su parte, la nueva Ley de Crédito promovía la tendencia individualista mediante la reducción de la explotación colectiva a una mera alternativa dentro de la ley, en vez de ser la forma de organización agraria por excelencia, como lo había sido durante el cardenismo. También se eliminaba el requisito de que los ejidos tuvieran que ser colectivos para recibir créditos refaccionarios (de mediano y largo plazos). Para 1947, las organizaciones de crédito ejidal eran controladas por el Banco Ejidal. Este asumió plena autoridad sobre las antiguas funciones del ejido referidas a la capitalización, el desarrollo, la comercialización y el crédito, a costa de las sociedades de crédito ejidal controladas por los productores directos (Sanderson, 1981:144-145).

En este punto, el Banco se convirtió en el virtual patrón de los ejidatarios, convirtiéndolos en un tipo de empleados estatales bajo un disfraz de campesinos. El Banco se apropió del proceso productivo, arrebatando su control a los productores directos, y bloqueó las bases de estos productores para la acumulación de excedentes.

Aun cuando las estructuras legales y la orientación general para el desmantelamiento de los ejidos colectivos se establecieron en 1942, las oficinas gubernamentales iniciaron una tenaz campaña contra ellos sólo al principio de la administración de Miguel Alemán en 1947. Los representantes del Banco, de la Secretaría de Agricultura y otros funcionarios del gobierno, trataron de convencer a los ejidatarios de que podrían adquirir mayores ganancias trabajando sus parcelas en forma individual, sin tener que pagar al ejido por sus funcionarios ni contribuir al fondo social para la compra de maquinaria (Hewitt de Alcántara, 1978:174). Así pues, las políticas estatales habían cambiado claramente para beneficiar a la burguesía agraria, en contra de los ejidos.

En respuesta a este cambio, los ejidatarios comenzaron a formar organizaciones de oposición. Muchos se afiliaron a la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), una organización de masas ligada al Partido Popular, fundado por Vicente Lombardo Toledano en 1947, quien fuera secretario general de la CTM en la época del cardenismo.

En ese tiempo, los miembros de los ejidos colectivos se afiliaron a la CNC y a la CTM, bajo el impulso del cardenismo, en apoyo a las organizaciones de masas (Carr, 1986). Pero ese era un período en el que el Estado había establecido una alianza popular con campesinos y obreros, y sus dirigentes podían hasta militar en el Partido Comunista y tener puestos ejecutivos dentro de la CNC y la CTM, para los cuales eran elegidos democráticamente.

Cuando Miguel Alemán llegó al poder, y con la ideología anticomunista promovida por la guerra fría, tales alianzas dejaron de ser posibles.

Los dirigentes comunistas fueron expulsados rápidamente de las organizaciones oficiales. La CNC y la CTM comenzaron a transformarse radicalmente: de representantes reales de sus bases, se convirtieron en aparatos estatales para el control político de obreros y campesinos. Al percibir estos cambios globales, "la CNC asumió una posición crecientemente individualista hacia la tenencia de la tierra y la explotación durante los años cuarenta, y hasta se alió a los propietarios privados en algunos estados para presionar por la estabilización de la tenencia de la tierra" (Sanderson, 1981:138).

El Banco Ejidal también se convirtió en un arma fundamental contra los ejidos colectivos. Otorgaba crédito sólo bajo la certeza absoluta de la recuperación. Esto, en sí mismo, no tuvo efectos tan adversos, pues los ejidos colectivos eran generalmente productivos. Pero para 1949, los ejidos que querían seguir siendo colectivos enfrentaban grandes dificultades para conseguir crédito, y los créditos refaccionarios fueron completamente suspendidos para ellos, afectando decisivamente sus posibilidades de mantenerse al día en la mecanización y los avances tecnológicos en general. Por el contrario, el Banco tenía una gran disposición para ayudar a que los ejidatarios obtuvieran ganancias, siempre y cuando estuvieran de acuerdo en fragmentar sus ejidos colectivos en parcelas individuales. Pero esta actitud del Banco duró sólo por un corto período, hasta 1950, cuando la mayoría de los ejidos colectivos habían sido ya desmantelados (Sanderson, 1981:175-178).

Steven Sanderson cita una reveladora afirmación de un editorial de *El Imparcial*, el diario de Hermosillo, Sonora, aparecido el 21 de junio de 1950 y señala que el gobierno federal había decidido atacar los bastiones del Partido Popular con una "arma poderosa: la economía":

Así pues, el Banco Ejidal entró en el juego para reorganizar no sólo a la Unión ejidal, sino también a las sociedades de crédito que dependen de ella, liquidando de una vez por todas cualquier cosa que huelga al Partido Popular para darle entrada... a la bandera de la CNC, que es adherente... del PRI (citada por Sanderson, 1981:141).

Inaugurada en 1939, la Unión Central, que era la organización económica creada por los productores directos para la autogestión de sus ejidos colectivos y otras empresas agrícolas, estaba aún bajo el control de los productores directos, hasta 1953. Manejaba una central de maquinaria, una tienda para la venta de refacciones y llantas, y hasta una línea de autobuses suburbanos. Además, la Unión daba a sus miembros una ventaja competitiva al negociar sus cultivos a mejores precios que los obtenidos por las empresas privadas.

Pero las recompensas estatales a quienes desertaban del colectivismo también significaron una reducción en la membresía de la Unión Central. Para 1953, el ataque gubernamental a esta organización económica incluyó el robo de maquinaria de los negocios de la Unión. En 1953, cuando

Maximiliano (el "Machi") López, director de la Unión, fue a la ciudad de México a presentar su protesta por el robo, fue asesinado. Este fue el último golpe que recibió la Unión Central. Después de este asesinato, las organizaciones regionales que constituían la Unión no fueron mucho más que organizaciones "de papel".

El estado de desorden económico, político y cultural en que quedaron los ejidos después del boicot oficial, ha quedado ejemplificado en la aldea Benito Juárez, descrita como un pueblo típico de los valles del yaqui y el Mayo, a principios de los años setenta. La vida se ha secularizado y monetizado enormemente, y casi no quedan rastros de una vida comunitaria. La participación organizada en asuntos de la comunidad se limita a juntas de padres de familia una o dos veces al año, convocadas por el único maestro de la escuela del pueblo. Los miembros del ejido, como tal, no se habían reunido en años para hablar de sus problemas comunes. Esto es entendible, puesto que las cuatro sociedades de crédito ejidal están dominadas por un solo ejidatario rico que renta las parcelas de sus compañeros. Ni siquiera se conmemora ya el aniversario de la reforma agraria en el Yaqui.

En este pueblo, otrora colectivista ya no queda espíritu de comunidad. Por el contrario, abundan las intrigas y la desconfianza, como en todo el valle después de la terrible década del cincuenta... Es el extremo lógico a que ha conducido una larga y sistemática campaña para desorganizar a los ejidos del valle. Ni siquiera la religión es útil para sanar las llagas de esta sociedad; como le dijo a Galicia un habitante de Benito Juárez, "aquí no hay más dios que los billetes." Un sacerdote católico apareció dos o tres veces por el pueblo, pero nunca volvió después, porque nadie acudía a sus servicios (Hewitt de Alcántara, 1978:226).

La aculturación se ha extendido ampliamente entre los indios yaquis y mayos, aunque de manera distinta entre ellos. Los mayos están más integrados con los blancos mestizos, aunque el 50% de la población en la región del mayo es indígena. En contraste, los yaquis viven muy aislados de los no indios, excepto en la estación Vicam, donde en 1959, la población era blanca casi en su totalidad. En este último año, había cerca de 12 000 yaquis (Erasmus, 1961:191). Esta diferencia puede explicarse en relación con los muchos conflictos que a través de la historia ha habido entre los yaquis y la sociedad mayor, lo cual los ha llevado a mantener entre ellos lazos más fuertes de solidaridad e identificación cultural que en el caso de los mayos (Hu-DeHart, 1981, 1984).

Para los años sesenta, la burguesía agraria había consolidado su poder económico y político, al grado de que los ejidos establecidos durante el cardenismo habrían de sucumbir ante el insaciable impulso capitalista por penetrar en la agricultura sonorenses. Los impedimentos legales para la penetración del capital en los ejidos no fueron obstáculo para permitir la entrada de la burguesía sonorenses a las fértiles tierras que habían sido

concedidas a los ejidatarios, fueran indios o mestizos. Para mediados de la década de los sesenta, el 80% de las parcelas ejidales estaban rentadas por agricultores capitalistas, y los ejidatarios a menudo trabajaban por un salario en sus propias parcelas (Hewitt de Alcántara, 1978:193).

En resumen, las políticas de Alemán consolidaron la orientación hacia la industria, así como al sector privado que prevalecería en el Estado mexicano hasta los setenta, y que aún hoy continúa después de un reparto significativo durante el régimen de Luis Echeverría (1970-1976). Alemán cambió el destino del crédito rural del ejido al sector privado; invirtió fuertemente en obras de irrigación de gran escala, en vez de en pequeñas obras de riego; inició los centros de mejoramiento de semillas, que se convertirían en el foco de la Revolución Verde, la cual resultaría en grandes incrementos de productividad, pero con efectos de polarización social y regional muy altos (Wade, 1974; Cleaver, 1972), y cambió el énfasis de la producción de alimentos para el consumo nacional a la producción de cultivos de exportación. Todas estas políticas iban encaminadas a la consolidación de la hegemonía de la burguesía industrial, en cercana alianza con su contraparte agraria.

Al boicot sistemático a los ejidos colectivos se sumó una política de "divide y vencerás", que consistía en que el Estado remuneraba a algunos ejidatarios para integrarlos a las organizaciones de masas por él controladas. La UGOCM y el Partido Popular fueron tremendamente debilitados o nunca lograron una fuerza significativa. Al mismo tiempo, la extensión de las relaciones de producción capitalistas dio como resultado un severo deterioro de las culturas yaqui y mayo, ya que la aculturación proveía a los indios de mejores capacidades individuales para manejarse de acuerdo con las nuevas reglas del mercado. Desafortunadamente para la burguesía agraria, este deterioro de la cultura étnico-campesina tendría un efecto importante en las luchas futuras, en las cuales la demanda por la tierra estaría acompañada por la demanda de otros medios de producción y por el control del proceso productivo en su conjunto.

EL NUEVO MOVIMIENTO AGRARIO: HACIA LA APROPIACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El boicot en los ejidos colectivos en el período de 1947-1954 fue seguido por una tremenda expansión de la frontera agrícola en Sonora. Este proceso fortaleció mucho a la burguesía agraria y abrió nuevas oportunidades de empleo asalariado a la mano de obra en expansión. De hecho, la superficie irrigada en el estado creció de 150 000 hectáreas en 1940 a 552 000 en 1960. Aunque la agricultura sonorenses se volvió cada vez más mecanizada, la gran expansión de la frontera agrícola permitió el crecimiento de las oportunidades de empleo hasta principios de los setenta. Así pues, la población económicamente activa en la agricultura creció de

61 500 en 1940 a 133 700 en 1960, lo cual refleja un crecimiento mucho más lento del empleo que de la superficie irrigada. Para 1970, con una superficie irrigada de más de 700 000 hectáreas, había poco más de 100 000 gentes empleadas en la agricultura (Ferra Martínez, 1987:4-5).

A principios de los años setenta, la agricultura sonorenses empezó a experimentar los efectos de la crisis capitalista. Las anteriormente exitosas uniones de crédito de la burguesía agraria entraron en una fase de fuertes pérdidas en el período 1971-1974 (Quintero, 1982). La baja en los precios del algodón hacia el final de la década de los sesenta había llevado a muchos empresarios a cambiar por el cultivo del trigo, que es altamente mecanizado, en grandes proporciones de tierra. Mientras que el algodón requería un promedio de 96 jornales por hectárea, el trigo sólo requería unos 7.5. La reducción total del cultivo del algodón en el estado de Sonora fue de 108 436 hectáreas, lo que ocasionó el desempleo de 36 166 jornaleros en 1975. Entre 1974 y 1975, el número de jornaleros desplazados de la agricultura en todo el país llegó a 7 233 366 (Canabal Cristiani, 1984:219).

En 1970, el 73% de la población económicamente activa en la agricultura de Sonora estaba compuesto por trabajadores agrícolas, mientras que el 1% de esa población poseía el 42% de la tierra cultivable. Por otra parte, la composición orgánica del capital se había incrementado enormemente. De acuerdo con algunas estimaciones, mientras que en 1940 el capital constante (maquinaria) constituía una tercera parte del capital variable (salarios), 20 años después el capital constante excedía los salarios en un 50% (Jiménez Ricárdez, 1976). Estos cambios crearon un ejército de reserva de fuerza de trabajo, con el efecto de reducir los salarios y aumentar las utilidades capitalistas, hasta que llegó la crisis de sobreproducción.

Así pues, para mediados de los años setenta se conjugaron tres factores que determinaron el surgimiento de una movilización combativa: 1) un creciente desempleo y un deterioro de las condiciones materiales de las masas rurales; 2) un proceso general de radicalización de la lucha de clases en todo el país, como resultado de la profundización de la crisis capitalista y la crisis campesina en la agricultura, y 3) los conflictos interburgueses en torno a la sucesión presidencial de 1976.

Para 1975, el proletariado y el semiproletariado agrícolas estaban poco organizados, o bien pertenecían: a una de las centrales oficialistas, a la CNC; a la Central Campesina Independiente (CCI); a la UGOCM-Jacinto López, o al Consejo Agrarista Mexicano (CAM), todos ellos signatarios del Pacto de Ocampo. Este pacto se concertó con el presidente Luis Echeverría, y en él convenían las organizaciones mantener la paz social en el campo. La UGOCM había sufrido una severa represión y varias escisiones para esa fecha. Dos de las fracciones escindidas mantuvieron el mismo nombre y había que distinguirlas por su apellido. Así pues, la UGOCM-Jacinto López se sujetó al control estatal al firmar el Pacto de Ocampo.

La fracción de izquierda se llamó en un primer momento UGOCM-PPS, para luego convertirse en UGOCM-PPM, lo que reflejaba a su vez una escisión en el propio Partido Popular Socialista. Mientras que el PPS era considerado un virtual apéndice del Estado, el Partido Popular Mexicano representaba un retorno a las posiciones lombardistas tradicionales. La UGOCM-PPM pertenecía entonces a esta tradición de una izquierda social demócrata y nacionalista.

Por su parte, la cci *también* tenía cierta influencia en Sonora, pero había sufrido asimismo una escisión con motivo del Pacto de Ocampo. La cci-Garzón firmó el pacto oficialista, mientras que la cci-Danzós asumió un nuevo nombre en 1975: Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) (Ferra Martínez, 1972; Sanderson, 1981). Este nombre reflejaba los nuevos debates que tenían lugar en el interior del Partido Comunista Mexicano (PCM), en el cual algunos intelectuales como Roger Bartra, identificados dentro de la corriente "proletarista", tuvieron una importante influencia en la caracterización de los cambios en la estructura agraria mexicana. Estos análisis veían una gran promesa revolucionaria en la presencia de un proletariado en la agricultura. En consecuencia, la CIOAC comenzó a favorecer las luchas por la sindicalización, por encima de las luchas tradicionales por la tierra. La dirigencia de la CIOAC estaba constituida por miembros del PCM, que en 1982 se integraría, junto con otros partidos de izquierda, en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), y en 1987 en el Partido Mexicano Socialista (PMS).

Bajo estas condiciones organizativas, dominadas por concepciones proletaristas en la izquierda y por el control oficial de la mayoría de las organizaciones de masas, la lucha por la tierra había perdido su *momentum* en Sonora hacia principios de los setenta: tanto las organizaciones oficialistas como las de oposición dedicaban sus mayores esfuerzos a sindicalizar a los jornaleros (Ferra Martínez, 1982). Pero este énfasis estrechamente economicista pronto sería cuestionado por las propias masas, quienes plantearían un nuevo objeto de lucha: la demanda por la tierra, claro, pero acompañada por la demanda, por el resto de los medios de producción y el control democrático del proceso productivo en su conjunto.

LAS TOMAS DE TIERRA DE 1975

El 19 de octubre de 1975, solicitantes de tierra afiliados al CAM y la cci-Garzón ocuparon tres lotes cerca del poblado de San Ignacio Río Muerto, Sonora. La mayoría de ellos eran residentes del poblado. Los medios nacionales y locales dieron amplia difusión al problema, mientras que las organizaciones de los terratenientes exigieron una acción enérgica del gobernador de Sonora, Carlos Biebrich, acusándolo de debilidad.

El 23 de octubre, Briebrich envió a la policía judicial, apoyada por tropas del ejército, a desalojar a "los invasores". En dos de los lotes, los ocupantes fueron desalojados "pacíficamente", pero en uno que era propiedad de la familia Dengel, el desalojo fue tan violento que tuvo como saldo 7 muertos, 15 heridos y muchos detenidos, a pesar de que ya habían consentido en abandonar el lote. Como resultado de esta sangrienta medida, Biebrich fue forzado a renunciar a la gubernatura el 25 de octubre, y su lugar lo ocupó el viejo político Alejandro Carrillo Marcor (Oswald *et al.*, 1986). Los dirigentes nacionales de las organizaciones pensaron que la renuncia de Biebrich sería suficiente para calmar los ánimos de los solicitantes, pero lo que ellos querían era la tierra y no un nuevo gobernador (Gordillo, 1988).

DE LA MOVILIZACIÓN ESPONTÁNEA A LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES DE OPOSICIÓN

Después de la masacre de octubre, los productores directos se lanzaron a la toma de tierras por fuera de las organizaciones oficialistas. Hasta las organizaciones independientes como la UGOCM-PPM y la CIOAC fueron rebasadas por esas movilizaciones, pues en ellas se pensaba que los sucesos de octubre eran principalmente resultado de conflictos intraburocráticos, y resolvieron permanecer neutrales. (Biebrich estaba identificado con Mario Moya Palencia como precandidato a la sucesión presidencial de 1976, y para entonces ya se había "destapado" a José López Portillo.)

Hacia fines de 1975, los dirigentes regionales de los solicitantes de tierra, la mayoría de los cuales habían pertenecido a la CNC, la CCI, o la UGOCM-Jacinto López, comenzaron a tener reuniones secretas para decidir las tácticas futuras de su lucha. La mayoría de estos dirigentes había roto ya con las organizaciones oficialistas del Pacto de Ocampo, pues las masas ya no estaban dispuestas a continuar con el que juzgaban colabacionista con el gobierno.

Al romper el alba del 3 de abril de 1976, cerca de 800 solicitantes de tierra tomaron el "bloque" 407 (cada bloque tiene unas 400 hectáreas de tierra), una propiedad llamada San Pedro, perteneciente a la familia Bórquez Esquer. San Pedro se localiza en el corazón del valle del Yaqui, a unos 10 kilómetros de Ciudad Obregón. Cuenta con varios edificios, densamente rodeados de árboles, lo cual representaba una protección natural estratégica en caso de represión armada por parte del Estado (Sanderson, 1981:191). Los ocupantes tomaron varias medidas adicionales de precaución. Abrieron diques en los dos caminos de acceso, dejando sólo el espacio suficiente para que cruzaran sus propios vehículos, y plantaron explosivos en los lugares adecuados por si había que cancelar las entradas en una emergencia. Tenían también poderosos reflectores para iluminar los dos caminos de acceso por la noche, y prepararon grupos armados de autodefensa (Martínez Ferra, 1982:45-47).

Los Bórquez eran de las familias propietarias más destacadas en la región, y tenían una considerable influencia en el gobierno. Ellos seguían los métodos usuales para evitar los límites legales sobre la propiedad territorial establecidos en la legislación agraria: registraron 400 hectáreas a nombre de los cuatro hermanos Bórquez. Y a medida que nacían nuevos hijos, los Bórquez compraban más propiedades y las registraban a nombre de los nuevos hijos. "Contando con 97 miembros en la familia, los Bórquez habían amasado cerca de 27 000 hectáreas de tierra para 1975" (Benjamín y Buell, 1985).

Los militares rodearon el bloque 407 unas horas después de la toma de tierra. El 6 de abril el gobierno envió dos representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria para negociar. Aunque los ocupantes decidieron aceptar su mediación, los tomaron como rehenes hasta que el gobierno retirara el ejército de los alrededores del bloque 407.

Los ocupantes de la tierra recibieron un amplio apoyo y solidaridad de otros grupos de solicitantes, sus parientes, los indios yaquis y los estudiantes, durante la presencia del ejército. Muchos de estos aliados acamparon fuera del sitio militar. Entre ellos había un camión con 50 indios yaquis, y uno de sus gobernadores advirtió: "si uno de nuestros hombres es tocado por el ejército, todo nuestro pueblo tomará la ofensa y responderá en consecuencia".⁵

Una vez que se retiró el ejército, hubo un *impasse* en el movimiento, pues la toma de tierra continuó hasta julio sin que se obtuviera una resolución favorable de parte del Estado. Para esta fecha ya habían tenido lugar muchas negociaciones entre representantes del gobierno de Echeverría, los ocupantes de tierra, y la burguesía agraria. Esta última ofrecía la cesión de 20 000 hectáreas mientras que el gobierno exigía 80 000.

Mientras tanto, los solicitantes de tierra inauguraron una organización formal que representara los intereses de su movimiento: el Frente Campesino Independiente (FCI). Su programa refleja claramente un carácter de clase que va mucho más allá de un programa campesino, a pesar de su nombre:

- Entrega de los latifundios a los campesinos organizados colectivamente, dando preferencia a los obreros agrícolas que trabajen en los predios.
- Expropiación de los latifundios sin ninguna indemnización.
- Estabilización de la banca privada.
- Reducción de la pequeña propiedad a 20 hectáreas.
- Estatización de los pozos propiedad de los particulares.
- Control campesino de la comercialización de los productos agrícolas. Control campesino de los recursos naturales.
- Sindicalización y derecho de huelga de los obreros agrícolas.

⁵ Información proporcionada por Carlos Martínez Ferra en entrevistas personales con el autor del 13 al 16 de enero, 1987, en Culiacán, Sinaloa.

- Derogación del derecho de amparo de los latifundistas.
- Formación de brigadas campesinas y grupos de autodefensa.
- Anulación de todos los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera.
- Representación democrática de los campesinos.
- Créditos baratos y dotación de maquinaria a los campesinos pobres (Ferra Martínez, 1982:48).

Ciertamente este programa plantea reformas más allá de las que surgirían de una visión "campesina" de cómo organizar la producción agrícola. Sin embargo, muchos observadores de izquierda llaman "campesinos" a los agentes de estas luchas, sobre la base de que su demanda principal sigue siendo la tierra. Mi argumento es que tal demanda asume un carácter cualitativamente distinto una vez que se asocia con el resto de las demandas arriba especificadas.

Abundaré sobre este punto brevemente.

¿CAMPESINOS, PROLETARIOS O SEMIPROFESIONALES?

Ferra Martínez (1982), Quintero (1982) y Canabal Cristiani (1984) coinciden al afirmar que hasta en un 80%, los solicitantes de tierra eran trabajadores asalariados temporales o permanentes en la agricultura o en agroindustrias, que algunos de ellos eran hijos de ejidatarios o jornaleros sin tierra residentes en pueblos ejidales. En sus conclusiones Ferra Martínez afirma que las luchas por la tierra y por la sindicalización eran cada vez más complementarias entre sí. No obstante, el autor nunca distingue entre los contenidos diversos que puede tener la propia lucha por la tierra. El programa del FCI, que él reproduce en su artículo, contiene claramente un profundo carácter postcapitalista en sus demandas globales. Sorprendentemente, aun Roger Bartra (1982) llegó a designar a los actores de las luchas sonorenses como "campesinos".

Desde mi punto de vista, tales actores deberían ser conceptualizados como semiproletarios, no como campesinos, dentro de las relaciones de producción. Es decir, ellos ocupan varias "posiciones de clase" durante el año, pero lo más probable es que la mayor parte de su ingreso sea aportado por sus empleos asalariados. De cualquier manera, dada la naturaleza temporal de su trabajo asalariado, el luchar por la sindicalización difícilmente constituye la mejor estrategia para los semiproletarios. Sus experiencias de trabajo les dicen que los empleados asalariados no son muy estables en la agricultura y son más bien escasos en la industria. Ninguna de las dos opciones les proporciona mucha seguridad económica. Desde este punto de vista, la lucha por la tierra puede ofrecer mayor seguridad y mejores perspectivas de un ingreso sostenido en el largo plazo.

Además, el determinar la posición estructural de las clases en la producción no es suficiente para dilucidar su formación política. Hay dos

elementos básicos que, desde mi punto de vista, constituyen a las clases políticamente: 1) los objetos de sus luchas o movimientos, es decir, el conjunto de reivindicación formuladas por los agentes sociales; 2) el carácter de las organizaciones construidas durante sus luchas. Así pues, el primer elemento determina el carácter de clase de los movimientos, mientras que el segundo define sus relaciones con respecto del Estado, las clases dominantes y las otras clases y grupos subalternos. Este último aspecto es de gran importancia. Pues no importa tanto si los agentes en lucha son campesinos o proletarios en las relaciones de producción: ninguna de estas clases es intrínsecamente revolucionaria o conservadora. Son más bien las relaciones que establecen sus organizaciones con otros grupos y clases lo que define su autonomía (o falta de ella) en el terreno político. Desde este punto de vista, el carácter político de las clases se define y redefine en la lucha misma.

Políticamente, la lucha de los semiproletarios del noroeste ha tenido un carácter "postcapitalista", más que proletario. Han estado inmersos en relaciones de cooperación capitalista por varias generaciones, lo cual naturalmente les hace preferir organizar la producción en forma cooperativa. Y puesto que la mayoría de las esferas de la vida en esa región han sido dominadas por el proceso de mercantilización, su orientación en la producción es en lo fundamental hacia el mercado. Naturalmente luchan por la tierra, pero también por el resto de los medios de producción, por una organización cooperativa, y por el control democrático del proceso productivo. Su lucha se asemeja a lo que sería una toma de fábrica por parte de obreros industriales (en el sentido restringido). Esta lucha no es necesariamente proletaria (como sería la mera lucha por la sindicalización), sino postcapitalista, en el sentido de que los agentes sociales se resisten precisamente a la proletarización al asumir el pleno control del proceso productivo global. Esta lucha establece las condiciones para el surgimiento de una "asociación libre de productores libres" (Marx).

En suma, el que la tierra sea uno de los objetos centrales de las luchas en el campo no es un determinante suficiente para calificar su carácter de clase. Es necesario analizar los otros elementos constitutivos del carácter político de las clases en lucha, una vez que se haya logrado la demanda del acceso a la tierra y a otros medios de producción. Estos elementos son: 1) la organización productiva por la que optan los productores directos (con base doméstica o cooperativa); 2) el carácter de las organizaciones de clase con respecto del Estado y la burguesía (de oposición o colaboracionista), y 3) las alianzas que establecen con otras organizaciones populares y de izquierda (o de derecha). Como se verá en un momento, el movimiento sonorensé resultó en una lucha progresista y postcapitalista de acuerdo con estos tres elementos.

LA EXPROPIACIÓN DE LA TIERRA

Unos días antes de que culminara la presidencia de Luis Echeverría, el 19 de noviembre de 1976, casi 100 000 hectáreas de tierra fueron expropiadas en los valles del Yaqui y Mayo. Cerca de 37 000 eran de riego y el resto de agostadero. Tres cuartas partes de la tierra habían sido propiedad de 21 familias, varias de las cuales tenían cercanos lazos de parentesco entre sí. Por otra parte, casi 75% de la tierra de agostadero estaba en manos de cuatro personas, una de ellas Faustino Félix, ex gobernador del Estado. En total, se afectó un 40% de las propiedades privadas irrigadas en el valle del Yaqui (Benjamín y Buell, 1985). De las 72 familias expropiadas, muchas representaban intereses industriales y comerciales.

La medida expropiatoria fue tomada inmediatamente después de que tuvo lugar la segunda devaluación del peso mexicano en ese año (tras un período de 22 años de estabilidad en la paridad cambiaria). La fuga de capitales, los temores y rumores antigubernistas estaban en su clímax. Uno de los rumores sugería la inminencia de un golpe militar dirigido por el propio Echeverría para perpetuarse en el poder.

Una vez que el Frente Campesino Independiente (FIC) y otras organizaciones de oposición de izquierda impusieron al Estado la medida de expropiar a la burguesía agraria más productiva, el Estado contraatacó al FIC al incluir sólo a un pequeño porcentaje de sus miembros en los nuevos ejidos. Y, además a los miembros de un mismo grupo de solicitantes se les asignó en ejidos distintos. De inmediato se movilizaron las organizaciones del Pacto de Ocampo para capitalizar los beneficios de la lucha y tratar de controlar la situación políticamente, dado que la mayoría de los beneficiarios había pertenecido formalmente a su membresía (Ferra Martínez, 1982; Camarena Castellanos y Encinas Terrazas, 1982).

A estas alturas, sin embargo, las bases de esas organizaciones oficialistas habían aprendido importantes lecciones del FIC. Se había dado cuenta de que si obtuvieron las tierras fue *a pesar* de la intervención de la CNC, la CCI, el CAM y la UGNCM-Jacinto López, y *gracias* a las movilizaciones independientes. Así pues, la mayoría de sus miembros pronto desertaron de las organizaciones corruptas y corporativistas (Canabal Cristiani, 1984:174). El semiproletariado sonoreño había estado inmerso en el clima de lucha de oposición dirigido por el FIC. Y aunque la mayoría de sus miembros individuales no recibió dotación de tierra, su conciencia había trascendido su individualidad y subjetividad para convertirse en la conciencia colectiva del semiproletariado de la región. Las lecciones de solidaridad, combatividad y autonomía respecto del Estado habían sido aprehendidas, y había quedado al descubierto el papel colaboracionista de las organizaciones del Pacto de Ocampo. Éstas ya no podrían ocultar su verdadero carácter de aparatos estatales, que actúan sobre todo para

controlar a las masas, si es necesario pisoteando sus intereses por favorecer al Estado y a la burguesía.

En el proceso de distribución territorial, Echeverría violó su propio Código Agrario de 1972 en dos aspectos. Primero, se asignaron sólo 5 hectáreas de tierra irrigada por ejidatario, cuando la ley establece 10 como mínimo. Esto limitó severamente la capacidad de empleo en los ejidos. Segundo, la prensa en el valle del Yaqui funcionaba ya a plena capacidad. Con el reparto, Echeverría “se propuso extender un distrito de riego plagado ya por problemas perennes de agua y almacenamiento” (Sanderson, 1981:194).

A pesar de los problemas materiales que implicaban estas violaciones de la ley, los nuevos ejidatarios han confrontado la situación exitosamente. De hecho, han sorprendido a todos los sectores de la sociedad mexicana por su ejemplar trabajo en términos económicos (productividad) y políticos (democracia).

EVALUACIONES RECIENTES DE LA COALICIÓN DE EJIDOS COLECTIVOS

Todas las evaluaciones —independientemente de dónde provengan— que se han hecho de la experiencia de la Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui y El Mayo (de aquí en adelante Coalición), coinciden en sugerir que ha sido altamente exitosa para los productores directos y aun para la nación. Un reportero del periódico *Unomásuno* resalta específicamente sus logros en términos de productividad e independencia política (Coo, 1984a, 1984b). El presidente local del Partido Acción Nacional (PAN), declaró al ser entrevistado: “Esos amigos han logrado una productividad *muy interesante* y además de trabajar muy bien la tierra, han invertido sus ganancias en equipo y agroindustrias, lo que le da a su trabajo una dimensión *muy interesante*” (citado por Coo, 1984a:8).

Otro aspecto señalado por el reportero de *Unomásuno* es la autonomía que los productores directos han logrado al construir su organización productiva, con importantes grados de independencia del Estado y la burguesía (Coo, 1984b:7).⁶ Como veremos, esta historia exitosa responde en gran medida a las intervenciones estatales adversas que los productores tuvieron que enfrentar una vez que obtuvieron la tierra. Si posteriormente el Estado intervino a su favor, fue sólo porque los trabajadores agrícolas

⁶ Más recientemente, en el verano de 1985, el Institute for Food and Development Policy de San Francisco, California, envió también a una reportera al Valle del Yaqui. Un breve recuento de su visita fue publicado en la revista mensual del Instituto, *Food First News* (1985), donde se refiere a la experiencia de la Coalición como ejemplar, puesto que —señala—, ofrece muchas lecciones “positivas” para otras luchas populares en la agricultura del tercer mundo. El informe completo del Instituto aparece en Benjamín y Buell (1985). Véase también Gordillo (1985a, 1985b, y 1988).

organizados políticamente le impusieron tales intervenciones, así como le habían impuesto el propio reparto. Podríamos denominar a este momento de la dinámica de la formación política de clases el "momento subjetivo", en que una clase subalterna, una vez formada políticamente, es capaz de determinar exitosamente al orientación de ciertas políticas estatales en su favor.

Puesto que las intervenciones estatales a favor de los productores organizados resultaron directamente de su iniciativa y de su fuerza política, tales intervenciones no terminaron en la corporativización de sus organizaciones. Por el contrario, como los trabajadores eran ya actores colectivos, sujetos del proceso, los nuevos éxitos resultaron en la consolidación de sus organizaciones de clase. En este "momento subjetivo", la clase subalterna tiene la iniciativa y la delantera. Esta nueva posición implica, desde luego, ganar mayores niveles de autonomía respecto de los aparatos económicos del Estado, sobre todo del Banco Ejidal (ahora Banrural).

EL DESEMPEÑO DE LA COALICIÓN Y SU PROGRAMA

Además de luchar por la obtención de las 10 hectáreas a que los ejidatarios tienen derecho por ley, el programa de la Coalición incluye también los siguientes puntos centrales: 1) la lucha contra el capital comercial, para lograr mejores condiciones de venta; 2) el autofinanciamiento de los ejidos y la independencia del Banrural a través de su propia unión de crédito; 3) el inicio de una serie de otras actividades productivas tales como un establo lechero y empresas textiles a partir de su cosecha del algodón, y 4) un programa de construcción para proporcionar viviendas adecuadas, cercanas al lugar de trabajo, y para facilitar la formación de vínculos comunitarios entre los ejidatarios en su vida cotidiana. Muchas de estas actividades están dirigidas a ampliar las oportunidades de empleo para los ejidatarios y sus hijos, tanto como a fortalecer económica y políticamente su organización (Canabal Cristiani, 1984).

La Coalición ha logrado, en promedio, mayores niveles de productividad que los del valle del Yaqui desde el comienzo de su operación. Esto es ya un gran mérito, pues tiene que competir directamente con los terratenientes locales, considerados tradicionalmente como los empresarios agrícolas más eficientes de México. En efecto, la productividad de la Coalición ha sido mayor que el promedio regional en los cultivos de trigo, algodón, maíz, sorgo, ajonjolí y garbanzo (véase el cuadro 2).

El cuadro 2 muestra los rendimientos por hectárea de la Coalición en trigo, soya y maíz, comparados con los promedios de todo el sector ejidal y el sector privado, y con el promedio de todo el Valle del Yaqui. Se eligieron sólo los tres cultivos más importantes para la Coalición, de los cuales el trigo es el más importante, puesto que generalmente se

CUADRO 2

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL VALLE DEL YAQUI, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, 1980-1986 (EN TONELADAS MÉTRICAS)

<i>Trigo</i>				
<i>Ciclo agrícola</i>	<i>Coalición</i>	<i>Sector ejidal</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Prom. general</i>
1980-81	4 351	4 579	4 613	4 403
1981-82	5 314	5 215	5 465	5 190
1982-83	5 008	4 864	5 106	4 941
1983-84	5 243	4 988	5 312	5 121
1984-85	4 876	4 744	5 009	4 861
1985-86	4 543	4 408	4 837	4 595

<i>Soya*</i>				
<i>Ciclo agrícola</i>	<i>Coalición</i>	<i>Sector ejidal</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Prom. general</i>
1982	2 009	2 054	2 188	2 108
1983	1 826	1 646	1 838	1 710
1984	1 644	1 545	1 689	1 608
1985	1 978	2 013	2 180	2 092
1986	2 154	2 114	2 127	2 119

<i>Maíz</i>				
<i>Ciclo agrícola</i>	<i>Coalición</i>	<i>Sector ejidal</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Prom. general</i>
1981-82	3 944	4 033	4 341	4 136
1982-83	4 163	3 801	4 044	3 914
1983-84	4 153	3 908	3 900	3 905
1984-85	4 244	4 069	4 236	4 113
1985-86	4 714	3 896	4 078	3 958

* Los datos de la Coalición se refieren a los ciclos de verano de cada año; los de los otros sectores son del ciclo de invierno. Así pues, algunas de las variaciones en rendimiento pueden deberse a las diferencias de los ciclos agrícolas.

FUENTE: Elaborado por el autor con datos del Departamento de Asistencia Técnica, Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui y El Mayo (proporcionados por Israel Gaxiola, coordinador), para los rendimientos de la Coalición, y del Departamento de Estadística Agrícola, Distrito de Riego 148, Cajeme, Sonora, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (información sobre el Distrito 41, Valle del Yaqui), para los sectores ejidal y privado y los promedios regionales.

le dedica el 50% de la superficie total de sus ejidos. Los otros cultivos ocupan entre un 2.5 y un 30% de la tierra cultivable. Este patrón del uso de la tierra es similar tanto en el sector ejidal como en el privado (Oswald, *et al.*, 1986:282).

Con la excepción de los ciclos de 1980-1981 y 1985-1986 para el trigo, y los de 1982 y 1985 para la soya, la Coalición siempre tuvo rendimientos superiores al promedio regional. Su productividad siguió muy de cerca al sector privado y generalmente tuvo rendimientos superiores a los de este sector en maíz.

Gustavo Gordillo (1988:123), en su afán por favorecer a la Coalición, presentó un cuadro sobre rendimientos que ocultan el verdadero desempeño de la misma. El problema es que sólo compara los rendimientos de la Coalición con los del resto de los productores del sur de Sonora y los del estado en su conjunto. Pero los rendimientos del sector ejidal parcelizado son tan bajos que, sumados con los del sector privado, el promedio general es menor que el de la Coalición. Pienso que el método correcto de comparación es el que se presenta en el cuadro 2, donde se desglosan los tres tipos principales de productores: Coalición, sector ejidal (que incluye a la Coalición y, sin embargo, su rendimiento promedio es más bajo), y el sector privado.

La razón principal por la que la Coalición no ha tenido un rendimiento igual o más alto que el del sector privado en todos los cultivos, es la siguiente: la Coalición tiene una política explícita de ahorro en los costos de producción basada en la eliminación de agroquímicos. De hecho, los técnicos que trabajan para la Coalición han determinado que el costo de los agroquímicos más caros no son compensados por incrementos mayores en rendimiento. Así pues, los mínimos diferenciales que existen entre los rendimientos de la Coalición y el sector privado involucran costos menores para la Coalición, y una práctica menos dañina para la ecología regional, al reducir la dependencia de los agroquímicos.⁷

La Coalición fue inaugurada formalmente como organización en mayo de 1978, tras una lucha impulsada por dos hechos cruciales. Uno fue la retención ilegal por Banrural de 11 millones de pesos, producto de la primera cosecha, supuestamente para pagar a los antiguos propietarios los gastos que habían realizado al inicio del ciclo agrícola. El otro hecho fue la existencia de un convenio secreto firmado por las organizaciones del Pacto de Ocampo, donde se comprometían a convencer a los nuevos ejidatarios de pagar aquellos gastos, de que respetaran las instalaciones existentes en las llamadas zonas de exclusión, y de que aceptaran como ejidatarios a los mayordomos y trabajadores permanentes de los propietarios. Estos últimos habían jugado un papel de esquirols durante la lucha por la tierra (Gordillo, 1988:104-105).

⁷ Información proporcionada por Israel Gaxiola, coordinador del Departamento de Asistencia Técnica de la Coalición, durante entrevistas con el autor en noviembre de 1987.

Esta fue la primera batalla que tuvieron que librar los nuevos ejidatarios, exitosamente, contra una intervención estatal en su contra. De allí se creó la conciencia de la necesidad de construir una sólida organización clasista no sólo de denuncia, sino para defender sus intereses, y capaz de proponer alternativas concretas para la organización y la producción. Así pues, uno de los resultados inmediatos de esta lucha fue la creación del Departamento Técnico de la Coalición (Castaños, 1982).

La siguiente gran batalla se libró para lograr la independencia financiera de Banrural, cuando los ejidatarios decidieron que ya no pagarían las cuotas de aseguramiento agrícola descontados por el Banco para ANAGSA (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A.), otro aparato económico del Estado. El seguro de ANAGSA sólo protegía el crédito otorgado por el Banco, pero no cubría las utilidades perdidas por los productores en algún siniestro. Como opción, la Coalición creó su propio fondo común con las cuotas que anteriormente se pagaban a ANAGSA. Dado el nuevo manejo de los recursos, el fondo común pudo proveer una cobertura más amplia: el 100% del valor de la cosecha, contra el 70% que antes cubría ANAGSA.

El Banco se opuso a la medida de inmediato y amenazó con negar créditos a la Coalición, a menos que se asegurara con ANAGSA. No obstante, mediante una movilización combativa de los productores directos, la batalla fue ganada por la Coalición. Aunque el fondo común se inició sin capital, excepto los créditos del banco para cubrir las cuotas del seguro agrícola, para 1982 contaba ya con un capital de 41 876 787 pesos. Con ANAGSA los ejidatarios nunca supieron cuál era el destino de sus pagos.

Pero la lucha por la autonomía respecto de Banrural tenía que ir más lejos. De aquí que la Coalición decidiera formar su propia unión de crédito, así como un departamento de comercialización, pues hasta entonces el Banco también se había encargado de vender sus cosechas. La unión de crédito comenzó a operar en 1979. Para 1982, contaba con 43 ejidos miembros, organizados dentro de tres "uniones de ejidos", y posteriormente se sumaron varios ejidos más.

Además de las ventajas obtenidas en la venta de las cosechas, este departamento de comercialización también se ha encargado de la compra de insumos. Por ejemplo, estableció un contrato con Fertimex, otra empresa estatal, para la compra de fertilizantes al mayoreo.

La organización interna de la Coalición permite y promueve la participación directa de todos sus miembros. De los 76 ejidos constituidos en 1976, 50 forman hoy parte de la Coalición. Hay asambleas mensuales en cada ejido, con una saludable asistencia del 70 al 90% de sus miembros. Todos los ejidos renuevan su dirigencia (los comisariados ejidales) cada tres años. Esta no puede reelegirse en periodos consecutivos, para evitar el entronizamiento de poderes personales (Benjamín y Buell, 1985). La tendencia de la mayoría de los movimientos agrarios

en México a elegir a las personalidades más carismáticas, ha cambiado para favorecer a los ejidatarios con mayores habilidades ejecutivas. Existe un organismo de dirección intermedia, constituido por la asamblea de presidentes de los comisariados ejidales, que se reúne mensualmente. Existe también un organismo ejecutivo, constituido por un presidente, un tesorero, un secretario y otros miembros que representa a la Coalición en todas sus funciones.⁸

La Coalición ha contratado un gran número de técnicos, pero los ejidatarios han tenido cuidado de que aquéllos no los sustituyan en la toma de decisiones. En efecto, los profesionales sólo deben proporcionar los elementos técnicos para que los ejidatarios tomen las decisiones, dentro de sus organismos constituidos democráticamente.

Puesto que al dotación inicial de tierra no incluyó espacios para viviendas, la mayoría de los ejidatarios vivían por lo general, lejos de sus lugares de trabajo. Entonces, la Coalición inició una lucha para conseguir tierra adicional donde llevar a cabo un gran proyecto de urbanización ejidal. Finalmente se consiguió el apoyo del gobernador Samuel Ocaña, con lo cual la Coalición obtuvo 410 hectáreas para las zonas urbanas en los valles del Yaqui y El Mayo: "Para 1985, los ejidos habían construido 12 zonas urbanas. Contando con 5 600 viviendas, escuelas, guarderías y facilidades para la recreación, se trata del proyecto de vivienda campesina más grande de todo México" (Benjamn y Buell, 1985:9). Los efectos globales del proyecto de urbanización han tenido varias implicaciones: reunir a los miembros de varios ejidos en una misma zona urbana, para favorecer la formación de lazos comunitarios; acercar a los productores a sus sitios de trabajo; proporcionar fuentes adicionales de empleo para ejidatarios y sus hijos y, por supuesto, un mínimo de bienestar a cada familia en la forma de una casa. Este último aspecto es muy valorado por los ejidatarios, pues la mayoría no poseía casa antes del proyecto de urbanización. Cabe resaltar que, dadas las altas temperaturas de la región, todas las casas ejidales cuentan con un aparato de aire acondicionado por lo menos para un cuarto. Este recurso sería impensable en viviendas campesinas u obreras de otras regiones de México.

En suma, el proceso de lucha de la Coalición se ha centrado en la apropiación del proceso productivo, con la finalidad de retener los excedentes generados por sus miembros y darles un uso democráticamente decidido. Las tres "prácticas sociales" dirigidas a lograr la apropiación del proceso productivo son: 1) la administración campesina, que elimina el control que antes ejercían los aparatos económicos del Estado, y bloquea la transferencia de los excedentes hacia fuera de la Coalición; 2) la práctica de la planeación, "que exige organizar recursos en función de metas preestablecidas" por cada uno de los ejidos en sus diversas instancias de

⁸ Para una descripción detallada del funcionamiento democrático de las diversas instancias organizativas de la Coalición, ver el reciente libro de Gustavo Gordillo (1988).

decisión, y 3) el encuadramiento de la asistencia técnica bajo las órdenes de la dirección campesina y en función de los requerimientos específicos de los ejidos colectivos. De acuerdo con Gustavo Gordillo, estas tres prácticas sociales cristalizan en la formación de aparatos económicos controlados por los productores directos, y se convierten en el apoyo inicial de su propio proceso de acumulación de excedentes (1988:133)-

HACIA UNA NUEVA CULTURA

Los rasgos culturales que ha desarrollado la experiencia de la Coalición, ponen especial énfasis en una ética de trabajo duro, en la eficiencia, en el trabajo cooperativo, en la solidaridad con otros grupos y clases subalternos y en la independencia respecto del Estado. En una encuesta realizada en 1981, entre una muestra del 5% de la membresía de cada ejido, el 76.5% respondió que prefería la organización colectiva sobre la forma individual o doméstica de organización. Este porcentaje es muy alto, considerando la fuerza con que se promovió la ideología individualista en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Aun cuando el 32% dio un apoyo calificado a la forma individual ("si se mantiene una buena organización y no surgen divisiones", o "si se comparte el trabajo por igual", etcétera), una amplia mayoría se pronunció en favor de la organización colectiva. Por lo que respecta a la participación, un 64% de los encuestados dijo que ellos participaban en la determinación de qué cultivos, semillas, fertilizantes y otros insumos se debían utilizar en el ejido, y 51% dijo que participaban en la elaboración de las reglas internas de sus ejidos respectivos (Camarena Castellanos y Encinas Terrazas, 1982:124-138). Otra encuesta realizada en 1984, con un marco muestral también del 5%, encontró que un 68% de los miembros de la Coalición daba un apoyo sin calificación a la organización colectiva (Oswald, *et al.*, 1986.:363).

Algunos de los nuevos rasgos culturales que favorecen el colectivismo, la solidaridad y la participación, quedan de manifiesto en la siguiente descripción de lo que la Coalición considera dos de sus compromisos centrales:

Queremos dejar bien claro: la Coalición de Ejidos Colectivos tiene un doble compromiso: para sí misma, que todos los ejidos colectivos que la forman se desarrollen económicamente, pero que también luchen por ser mejores en todos los aspectos; que participen más en la solución de sus problemas; que toda asamblea general de ejidatarios de cada ejido se constituya en una fuerza que no deje entrar a la reacción; que no busquen en las soluciones personales de sectorización o división de ejidos la solución a los problemas, sino que, como una sola unidad, analicen y propongan las mejores soluciones, anteponiendo el interés colectivo al interés y prestigio personal. Para con todas las organizaciones campesinas y obreras en lucha en el país lo que hemos logrado obedece fundamentalmente a que no estamos solos. Forma-

mos parte de una unidad de campesinos, obreros y profesionales comprometidos... Queremos sellar un compromiso; lo que tenemos lo ponemos a disposición de la lucha de los trabajadores de México. Nuestra experiencia, como en el caso de Chiapas, para la constitución de una Unión de Crédito; nuestra sociedad, como en el caso de Durango, para el ingreso a la Unión como socios. Con ello se fortalece la unidad política y económica (Coalición, 1982:21-22).

Esta declaración fue hecha en la reunión anual de defensa de los ejidos colectivos de Sonora en 1982, organizada por la propia Coalición, junto con docenas de otras organizaciones obreras, campesinas y profesionales. Estas reuniones anuales han sido parte de las manifestaciones de solidaridad que amplios sectores de la izquierda mexicana y otras organizaciones democráticas han brindado a la Coalición.

EPÍLOGO

La actual crisis económica se da en un contexto en el que la mayoría de las empresas industriales y la agricultura moderna dependen mucho de la importación de equipo, maquinaria y otros insumos. A la vez, dicha crisis ha estado marcada por fuertes y continuas devaluaciones del peso mexicano y una deuda externa enorme, que han hecho que las importaciones sean casi prohibitivas. En tanto explotaciones modernas, los ejidos de la Coalición no son una excepción a la regla. Así pues, los problemas de la crisis económica de México afectan severamente a la Coalición, en la medida en que ésta mantiene una tremenda dependencia de maquinaria importada de los Estados Unidos, específicamente de la International Harvester, la Ford International y Allis Chalmers (Benjamín y Buell, 1985).

En un congreso reciente de académicos y dirigentes agrarios en Culiacán, Sinaloa, Juan Leyva Mendivil, ex presidente de la Coalición, presentó una ponencia, esta vez como representante de la Alianza Campesina del Noroeste (ACN, que incluye ejidos de Sonora, Sinaloa y Chihuahua). Su trabajo está dedicado al análisis económico de cómo afecta la actual crisis a la producción agrícola de sus ejidos.

La evolución de los precios del trigo, por ejemplo, ha sido rebasada por la de los costos de producción. De 1980 a 1986, los precios crecieron en un 1 633% en contraste con los costos, que lo hicieron en un 2 528%. En términos de kilogramos de trigo, en 1980 se requerían 2 110 kilogramos para cubrir los costos de producción de una hectárea; en 1986 los ejidatarios tenían que producir 3 270 kilogramos para el mismo propósito. Por el contrario, en 1980 las ganancias eran de 2 390 kilogramos por hectárea, en contraste con sólo 1 230 en 1986. Las dificultades de mantenerse al parejo con el cambio tecnológico y reponer la maquinaria se expresan en las siguientes cifras. En 1982 los ejidos requerían 306 toneladas de trigo

para comprar una trilladora; para 1986 necesitaban 965 toneladas para reponerla (Leyva Mendívil, 1987).

Dada la relativamente escasa cantidad de tierra obtenida por cada ejidatario en 1976 (5 hectáreas), el empleo fuera del ejido sigue siendo una necesidad imperiosa. Si bien el ejido proporciona un empleo por un promedio de sólo 70-75 días por año a cada miembro de la Coalición, con ello obtiene el equivalente a un salario mínimo durante todo el año. Como el salario mínimo es a todas luces insuficiente para mantener a una familia, son indispensables otros empleos. En efecto, un estudio realizado en 1982 por un grupo de la Universidad Autónoma de Chapingo, entre una muestra del 5% de los ejidatarios de la Coalición, encontró que un 60% de sus ingresos provenían del empleo ejidal, y un 40% provenía de la venta de su fuerza de trabajo por fuera del ejido (Quintero, 1982).

Uno de los problemas de la Coalición es que no todas las empresas agroindustriales han funcionado adecuadamente. El ejemplo más dramático de una decisión económica fallida es la compra de una despepitadora de algodón a la Anderson Clayton hace cuatro años. Dicha compra se dio en el contexto de una sustitución de cultivos en la región en contra del algodón, y cuando la despepitadora estaba casi en quiebra. Como resultado de ello, la Coalición ha enfrentado enormes dificultades económicas para pagarla, y a fines de 1987 estaba solicitando un crédito de 500 millones al gobierno del estado para sostener su proceso productivo global.⁹

En medio de la coyuntura electoral que se vivía a fines de 1987, el gobernador Rodolfo Félix Valdéz y su equipo ejercieron fuertes presiones para que la Coalición se integrara formalmente a la CNC del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, a pesar de que el flamante presidente de la Coalición, Juan Díaz Leal, parecía dispuesto a acceder a cambio de ayuda económica, sus bases le impidieron tomar tal decisión en reuniones de asamblea. No estaban dispuestas a comprometer su autonomía política estratégica por un auxilio coyuntural. Más tarde, 44 presidentes de comisariados ejidales se reunieron con el gobernador para explicarle la posición estatutaria de la Coalición, en el sentido de mantenerse autónoma de todas las organizaciones políticas partidarias. Sin embargo, una de las tres uniones de ejidos que conforman la Coalición, la "19 de noviembre", que es la más activa y mejor organizada, ingresó formalmente a la CNC a principios de noviembre de 1987.

Fue curioso observar que, aun cuando al mayoría de los dirigentes de la Coalición está afiliada formalmente y a título personal a la CNC y al PRI, todos los entrevistados por este autor en noviembre de 1987 opinaban que la Coalición como tal no debía afiliarse a las organizaciones oficiales. Y fue tal vez una fortuna estratégica para la Coalición el haber desarrolla-

⁹ Discurso de Juan Díaz Leal, presidente de la Coalición (1987-1989), en la conmemoración del 11 aniversario de la expropiación de tierras, en Ciudad Obregón, Sonora, 19 de noviembre, 1987.

do mecanismos democráticos para evitar tal posibilidad, aun cuando su presidente podía haber estado dispuesto a abandonar la lucha por la autonomía política. Pues el futuro económico de la Coalición depende en gran medida de su propia fuerza y capacidad de movilización política.

RECAPITULACIÓN TEÓRICA

Con el análisis precedente, es difícil ver cómo habrían podido predecir los campesinistas o los proletaristas mexicanos los resultados de las luchas por la tierra en el sur de Sonora. De hecho, en un primer momento, estas luchas causaron cierta desilusión en los proletaristas. Roger Bartra (1982), por ejemplo, interpretó este movimiento agrario como el último recurso del "populismo tecnocrático" echeverrista para contener la movilización agraria. Por el contrario, Arturo Warman (1980) celebró el hecho de que hasta los obreros agrícolas estaban luchando por demandas supuestamente "campesinas". En su artículo "Sobre el problema del proletariado agrícola", después de señalar que los obreros de Sonora habían estado separados de sus medios de producción por tres o cuatro generaciones, afirma: "Este grupo proletario se ha organizado recientemente alrededor de demandas estrictamente agrarias y no de carácter obrero, gremial, con todas sus implicaciones" (Warman, 1980:172). Hay dos falacias en la forma como Warman aborda el problema. Primera, él identifica la demanda por la tierra como una demanda "estrictamente agraria", lo que para él significa una demanda *campesina*. Como he argumentado en este trabajo, es necesario ver el conjunto de las demandas para poder dar cuenta de su carácter de clase. Además, este análisis de los objetos de lucha debe complementarse con el análisis de las organizaciones de clase para la lucha que se genera a partir del movimiento. Sólo con estos dos criterios juntos se puede determinar adecuadamente el carácter de clase de un movimiento social, aun cuando su demanda principal sea la tierra.

Segunda, cuando Warman habla de los "proletarios agrícolas permanentes", dice que éstos generalmente se alían a los capitalistas agrarios, entrando así en contradicción con los "proletarios temporales" (1980:172). La duda que tengo respecto a tal afirmación es si Warman realmente habla de proletarios propiamente dichos, o más bien de empleados permanentes que ocupan posiciones de supervisión, como los mayordomos. Por lo menos en Sonora, es muy probable que así sea, es decir, que los pocos empleados permanentes que trabajan en empresas agrícolas capitalistas ocupan posiciones de supervisión, o lo que Erik Olin Wright ha denominado "posiciones contradictorias de clase" entre el trabajo y el capital (Wright, 1978, 1979, 1985). Si éste es el caso, no debe extrañar que en ciertas coyunturas los ocupantes de tales posiciones se alíen con los patrones y no con los obreros.

Desde mi punto de vista, la interpretación de Roger Bartra falla también, por lo menos por dos razones. Primero, se equivoca al llamar "campesinos" a los agentes de clase atendiendo únicamente a su demanda central por la tierra, puesto que en realidad se trata de semiproletarios altamente dependientes de ingresos salariales (si hemos de mantener un concepto de clase económica basado en las relaciones de producción. Segundo, Bartra parte del supuesto de que la iniciativa para redistribuir la tierra provino del Estado, de su fracción "populista tecnocrática", cuando lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: el movimiento impulsó la política estatal de redistribución, dada la correlación de fuerzas que logró establecer con su lucha. Este error de presentar al Estado como el sujeto de la mayoría de las políticas es bastante común: la contribución por lo demás lúcida de Steven Sanderson (1981) comparte esta interpretación.¹⁰

El desarrollo capitalista mexicano ha resultado en un proceso de "des-campesinización sin proletarización completa" (Bartra y Otero, 1988). En términos estrictos, los nuevos sujetos económicos que emergen son semiproletarios: no pueden depender sólo de los salarios para llenar sus necesidades de reproducción. De aquí que el resto de las relaciones que establecen para lograr su reproducción económica puede conducir a la preservación o la formación de elementos culturales no-capitalistas, aun cuando se desarrollen dentro de un contexto mercantil. Dada la heterogeneidad estructural de la sociedad en países como México, es imprescindible trascender el análisis reduccionista de clases para el estudio de la formación política de las mismas. Aquí se ha sugerido la importancia de otras dos determinantes mediadoras del proceso: la cultura y la intervención estatal.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Camín, Héctor, *La frontera nómada: Sonora y la Revolución mexicana*, México, Siglo XXI Editores, 1977.
- Bartra, Roger, *Campesinado y poder político en México*, México, Ediciones ERA, 1982.
- Bartra, Roger y Gerardo Otero, "Crisis agraria y diferenciación social en México", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. I, núm. 1, enero-abril, 1988.

¹⁰ Aun Gustavo Gordillo (1988), quien fue un "observador participante" en el proceso de constitución de la Coalición, tiende a presentar la crónica de las luchas poniendo mucho mayor énfasis en los conflictos (muy reales, por cierto) entre el gobierno de Echeverría y la burguesía sonoreña. Basta con señalar que Gordillo menciona al Frente Campesino Independiente sólo tres o cuatro veces en su recuento, y no acierta en destacar el papel fundamental que jugó esta organización en el desarrollo de la lucha.

- Benjamín, Medea y Rebecca Buell, "Coalition of Ejidos Report: The Coalition of Ejidos of the Valleys of Yaqui and Mayo, Sonora State, México", San Francisco, California; Institute for Food and Development Policy, 1985.
- Canabal Cristiani, Beatriz, *Hoy luchamos por la tierra*, Colección Ensayos, México; Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1984.
- Carr, Barry, "The Mexican Communist Party and Agrarian Mobilization in the Laguna 1920-1940", trabajo presentado en la reunión anual de la Latin American Studies Association, Boston, 22-25 de octubre, 1986.
- Castaños, Carlos Manuel, *Los ejidos colectivos de 1976: la lucha por la tierra en el Valle del Yaqui*, Chapingo, México, Editorial Sáenz Colín y Asociados, S. A., 1982.
- CEPAL (Alejandro Schejtman) *Economía campesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro mexicano*, México, Siglo XXI Editores, 1982.
- Cleaver, Harry, "Contradictions of the Green Revolution", *Monthly Review*, vol. 2, núm. 1, junio, 1972.
- Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo, *En defensa del ejido*, México, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, A. C., 1982.
- Coo, Jorge, "Probó el ejido colectivo ser más eficiente", *Unomásuno*, México, 15 de diciembre, 1984a.
- Coo, Jorge, "Libertad para organizarse, base del éxito en el Valle del Yaqui", *Unomásuno*, México, 17 de diciembre, 1984b.
- Erasmus, Charles J., *Man Takes Control: Cultural Development and American Aid*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1961.
- Ferra Martínez, Carlos, "El movimiento campesino de Sonora: 1975-1976", *Textual: análisis del medio rural*, Chapingo, vol. 3, núm. 10, diciembre, 1982.
- Ferra Martínez, Carlos, "Lucha de clases en el campo sonoreño (de 1930 a la actualidad): Una propuesta de periodización", trabajo presentado en el Primer Encuentro sobre Problemas Agrarios del Noroeste de México y el Suroeste de los Estados Unidos, Culiacán, Sinaloa, 13-16 de enero, 1987.
- Ferra Martínez, Carlos, "Collective Farming: Can It Work?", *Food First News*, núm. 22, 1982.
- Gordillo, Gustavo, "La otra Sonora: el asalto al cielo de los campesinos", *El Día*, México, 11 de agosto, 1985a.
- Gordillo, Gustavo, "El ejido, eje de la producción alimentaria", *El Día*, México, 17 de agosto, 1985b.
- Gordillo, Gustavo, *Campesinos al asalto del cielo: de la expropiación estatal a la apropiación campesina*, México, Siglo XXI Editores-Universidad Autónoma de Zacatecas, 1988.
- Gutiérrez Hernández. Cecilio, José Socorro López Quiñones, José Antonio

- Romero Sánchez y Juan Velasco Naranjo, "Ejido colectivo, revolución verde y lucha de clases en el sur de Sonora", tesis profesional, México, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.
- Hamilton, Nora, *The Limits of State Autonomy: Postrevolutionary Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1982.
- Harris, Richard L., "Marxism and the Agrarian Question in Latin America", *Latin American Perspectives*, vol. 5, núm. 4, 19 edición, 1978.
- Hewitt de Alcántara, Cynthia, *La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970*, México, Siglo XXI Editores, 1978.
- Hewitt de Alcántara, Cynthia, *Anthropological Perspectives on Rural Mexico*, Nueva York, Routledge and Kegan Paul, 1984.
- Hu-DeHart, Evelyn, *Missionaries, Miners and Indians: Spanish Contact with the Yaqui Nation of Northwestern New Spain*, Tucson, University of Arizona Press, 1981.
- Hu-DeHart, Evelyn, *Yaqui Resistance and Survival: the Struggle for Land and Autonomy 1781-1910*, Madison y Londres, University of Wisconsin Press, 1984.
- Jiménez Ricárdez, Rubén, "Movimiento campesino en Sonora", *Cuadernos Políticos*, núm. 7, enero-marzo, 1976.
- Leyva Mendivil, Juan, trabajo presentado a nombre de la Alianza Campesina del Noroeste, en el Primer Encuentro sobre Problemas Agrarios del Noroeste de México y el Suroeste de los Estados Unidos, en Culiacán, Sinaloa, 13-16 de enero, 1987.
- Martínez Alier, Juan, *Haciendas, plantaciones and Collective Farms: Agrarian Class Societies-Cuba and Peru*, Londres, Frank Cass, 1977.
- Oswald, Úrsula, Rafael Rodríguez y Antonio Flores, *Campesinos protagonistas de su historia (la Coalición de los Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui y El Mayo: una salida a la cultura de la pobreza)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 1976.
- Otero, Gerardo, "Political Class Formation in Rural Mexico: Class, State and Culture", tesis doctoral, University of Wisconsin-Madison, Ann Arbor, MI, University Microfilms, Inc., 1986.
- Otero, Gerardo, "Agrarian Reform in Mexico: Capitalism and the State", en William Thiesenhusen (ed), *Searching for Agrarian Reform in Latin America*, Winchester, MA, Allan & Unwin (en prensa), 1989.
- Quintero, Ariel, "La Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui y Mayo", trabajo presentado en el Segundo Congreso Nacional sobre Problemas Agrarios, Chilpancingo, Guerrero, México, 7-11 de junio.
- Rello, Fernando, "El Leviatan lagunero", manuscrito inédito, 1984.
- Sanderson, Steven E., *Agrarian Populism and the Mexican State: the Struggle for Land in Sonora*, Berkeley; University of California Press, 1981.
- Silos-Alvarado, José S., "The Yaqui Valley of Sonora, México: its Agricultural Development, Resource Utilization and Economic Potential", tesis

- doctoral, Cornell University, Ann Arbor, MI, University Microfilms, Inc., 1968.
- Wade, Nicholas "Green Revolution: a Just Technology Often Unjust in Use", *Science*, vols. 186 y 187, 20 y 27 de diciembre, 1974.
- Warman, Arturo, *Ensayos sobre el campesinado en México*, México, Nueva Imagen, 1980.
- Wright, Erik Olin, *Class, Crisis and the State*, Londres, New Left Books, 1978.
- Wright, Erik Olin, *Class Structure and Income Determination*, Nueva York, Academic Press, 1979.
- Wright, Erik Olin, *Classes*, Londres, New Left Books, 1985.